

INMIGRANTES INDOCUMENTADOS EN ESTADOS UNIDOS: CAMBIOS EN EL MOVIMIENTO Y RESISTENCIAS DESARROLLADAS

FERNANDO E. VILLEGAS RIVERA*
ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ**

INTRODUCCIÓN

Recientemente hemos sido testigos de un aumento en las expresiones xenofóbicas y discriminatorias de parte de oficiales de gobierno y de algunos sectores sociales hacia grupos de inmigrantes —en especial hacia los indocumentados— en países como Estados Unidos, Francia, España, Bélgica, Reino Unido, los Países Bajos, entre otros (Nicholls, 2013). Se han implementado entonces, políticas migratorias cada vez más restrictivas (lo que no es nada nuevo) que tienen como una de sus consecuencias la vulneración de los derechos humanos de los inmigrantes y, en algunos casos, de los propios ciudadanos de dichos países.

En Estados Unidos, país que cuenta con la mayor cantidad de inmigrantes a nivel mundial en términos absolutos, las actitudes, discursos y políticas hostiles hacia los inmigrantes que provienen principalmente de Latinoamérica y de algunos países de Asia occidental y del norte de África (estos últimos de mayoría musulmana), se han exacerbado en los albores de la actual administración federal estadounidense con Donald Trump como presidente. Aunque como sabemos, la militarización de la frontera y el reforzamiento de los controles internos de seguridad que criminalizan a los inmigrantes en Estados Unidos, no son característicos sólo de esta administración. Por ejemplo, en un comunicado de prensa lanzado en 2010

* Universidad de California, Los Ángeles. Doctorante en el programa de Estudios Chicana y Chicano.

** Universidad Autónoma de Sinaloa. Profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Sociales.

por la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (*Department of Homeland Security*), Janet Napolitano, se dio a conocer que durante la administración del presidente Barack Obama se rompieron récords históricos en cuanto a deportaciones.

En efecto, Gonzales (2014) encuentra que el aumento más significativo en cuanto a deportaciones comenzó en la década de 1990, incrementándose drásticamente después de los ataques a las torres gemelas en 2001 y alcanzando su punto máximo durante el periodo presidencial de Obama. Es así que la tendencia antiinmigrante continúa, pero ahora la percepción en el imaginario público es una de mayor hostilidad e incertidumbre.

Ante este panorama adverso, los inmigrantes indocumentados, diversas organizaciones y ciudadanos pro-inmigrantes, inmigrantes con residencia legal e inmigrantes con estatus legal precario, han desarrollado mecanismos de resistencia para enfrentar este tipo de afrentas. En diferentes periodos de la historia de Estados Unidos, han surgido diversas manifestaciones en oposición a políticas generadas por el Estado. Ejemplos de estas movilizaciones masivas las encontramos en las luchas por los derechos de los trabajadores que se llevaron a cabo a finales del siglo XVIII, durante el movimiento por los derechos civiles en 1963 o en las protestas contra la guerra en Vietnam en 1969 (Bloemraad, Voss y Lee, 2011). Sin embargo, ninguna de estas manifestaciones se compara, en términos de convocatoria, con las ocurridas en 2006, en donde los inmigrantes indocumentados salieron de las sombras y manifestaron su descontento ante la amenaza inminente que significaba la aprobación de la Ley H.R. 4437, también conocida como Ley Sensenbrenner. Su objetivo era criminalizar a los inmigrantes indocumentados y a todo individuo u organización que decidiera proveerles servicios, además de fortalecer significativamente la frontera México-Estados Unidos.

En este sentido, nos interesa *reevaluar* aquí dichas manifestaciones. A más de diez años de haberse presentado las marchas, han surgido estudios empíricos y en menor medida teóricos, para explicar los factores que propiciaron el surgimiento de estas manifestaciones, así como sus características y consecuencias. Así, este capítulo es una revisión actualizada del artículo que lleva por nombre “El movimiento de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos”, el cual fue publicado un año después de las marchas en la revista *Política y Cultura*. En aquella ocasión, Arturo Santamaría (2007) relató los antecedentes y las características de las movilizaciones de 2006. Ahora, además de agregar información relevante sobre las manifestaciones, incorporaremos un análisis de sus consecuencias y de la trayectoria que ha seguido el movimiento de los inmigrantes indocumentados, además de incorporar un breve análisis sobre las acciones de la actual administración federal con relación a temas migratorios.

LOS LATINOS EN ESTADOS UNIDOS: ALGUNOS DATOS DE RELEVANCIA

Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de inmigrantes a nivel mundial. De acuerdo a datos de la División de Población de las Naciones Unidas, en 2015 había más de 46 millones y medio de inmigrantes viviendo en dicho país, lo que representa el 19.1% respecto a la cantidad de inmigrantes internacionales en el mundo (Naciones Unidas, 2016).

En cuanto a los inmigrantes que no cuentan con autorización para vivir y/o trabajar en Estados Unidos, el *Pew Research Center* estima que para 2014, había aproximadamente 11.1 millones de inmigrantes en dicha condición. De ellos, 52% eran mexicanos, 15% eran centroamericanos y 10% sudamericanos y del Caribe. Después de alcanzar su punto más alto en 2007, cuando la cifra llegó a superar los 12 millones, la cantidad de inmigrantes no autorizados disminuyó en 2008, para después mantenerse estable. Esto se debe a una reducción en cuanto a la inmigración no autorizada de mexicanos y a un aumento en la de otros países, principalmente la de Asia y Centroamérica. Aun así, los latinos en su conjunto representan la mayor cantidad de inmigrantes no autorizados viviendo en Estados Unidos (PEW, 2017). Con relación a los lugares de asentamiento de los inmigrantes no autorizados, los estados que concentraron la mayor cantidad fueron en 2014: California, Texas, Florida y Nueva York, que a su vez son los estados que concentran a la mayor cantidad de trabajadores sin documentos legales para residir en Estados Unidos (*ibid.*).

Otro dato significativo respecto a los migrantes no autorizados, es el relacionado con las familias de estatus mixto. En estas familias, uno de sus miembros carece de documentos para residir en Estados Unidos, lo que genera dificultades, miedo y estrés para la familia y los miembros de la comunidad en la que residen (Abrego, 2016). De acuerdo con datos del Consejo de Inmigración Americano (*American Immigration Council*), al menos 16.7 millones de personas vivieron en Estados Unidos con al menos un inmigrante indocumentado entre 2010 y 2014 (AIC, 2017). Esto, de acuerdo a Abrego (2016), visibiliza las repercusiones que tienen las leyes antiinmigrantes, ya que el discurso oficial generalmente se enfoca únicamente en los inmigrantes indocumentados, cuando la realidad nos dice que este tipo de políticas tiene repercusiones de mayor alcance.

Sin tomar en cuenta su estado legal o condición de ciudadanía, en 1980 los latinos representaban el 6.5% del total de la población de Estados Unidos. Actualmente representan el 17.6 % del total de la población (PEW, 2017). Estos son ya mayoría en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, en California; Houston y Dallas, en Texas; Chicago en Illinois y Nueva York, entre otras (Santamaría 2007).

LAS MANIFESTACIONES DE 2006: UN MOVIMIENTO SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS

En diciembre de 2005 se aprobó el Proyecto de Ley para la Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal, también conocida como H.R. 4438 o Ley Sensenbrenner, dado que el artífice de la misma es el congresista James Sensenbrenner. Esta propuesta pretendía convertir en delito grave a la inmigración indocumentada y a todos aquellos que les proveyeran asistencia, además de aumentar sustancialmente los recursos destinados a la seguridad fronteriza y al interior del país, entre otras medidas draconianas (Nicholls, 2013).

Esto fue lo que detonó una movilización sin precedentes y una politización inmediata. En enero de 2006, líderes de las comunidades latinas se reunieron en la costa este y oeste con el fin de organizar planes de acción para enfrentar la decisión de los legisladores. Así, en Riverside, California, se llevó a cabo la primera Cumbre de Liderazgo Mexicano/Latino, a la que asistieron más de 500 líderes provenientes de diferentes estados de la Unión Americana y donde se planearon las manifestaciones que aglutinarían a la mayor cantidad de personas en la historia de Estados Unidos. De manera excepcional, las marchas se llevaron a cabo de manera pacífica. Esto marcó el inicio de la primera etapa del movimiento. En la segunda etapa, la lucha se trasladó ahora a los barrios, las escuelas, los centros de trabajo y se comenzó a cabildear con el Senado y la Cámara de Representantes. Tal fue el poder colectivo demostrado por la comunidad latina y las organizaciones pro-inmigrantes, que el proyecto de ley H.R. 4437 fue rechazado por el Senado (Santamaría, 2007; Gonzales, 2014). Las manifestaciones de 2006 en favor de los derechos de los inmigrantes, probablemente sean las de mayor magnitud en la historia y dada su magnitud, alcance y características, merecen una explicación empírica y teórica (Bloemraad, Voss y Lee, 2011).

ANTECEDENTES DEL ACTIVISMO INMIGRANTE INDOCUMENTADO

Las naturalezas de las marchas acontecidas en 2006 hicieron tambalear los conocimientos académicos preexistentes sobre la participación política y de los movimientos sociales. Ante la perplejidad de las manifestaciones, algunos académicos las catalogaron como un movimiento que surgió de manera espontánea y efímera (Killian, 1984; Biggs, 2003, 2005, citados en Bloemraad, Voss y Lee, 2011). Sin embargo, la mayor parte de estudios empíricos y teóricos existentes sostienen que el movimiento no surgió de

forma repentina, sino que obedece en buena medida a una legacía activista en un proceso que llevaba germinando cuatro décadas cuando menos (Santamaría, 2007; Gonzales, 2014; Barreto *et al.*, 2009; Voss y Bloemraad, 2011).

Santamaría (1988, citado en Santamaría, 2007) nos recuerda algunas de las luchas en las que participaron los inmigrantes indocumentados y que son poco conocidas a nivel nacional. Por ejemplo, las primeras luchas laborales en donde los trabajadores indocumentados constituyeron la vanguardia, fueron las de los sindicatos agrícolas de Texas y Arizona en 1975 y 1977. También presenciamos su involucramiento en las protestas de 1991 llevadas a cabo en Los Ángeles y, aunque en aquella ocasión no se tenía un objetivo definido,¹ lo que deja en evidencia es su descontento social producto de años de frustración y discriminación por parte del Estado. Además, este tipo de acciones por parte de los inmigrantes indocumentados, así como su participación en luchas sindicales, vecinales, educativas y culturales, contradice claramente lo sostenido por algunos académicos tradicionales y periodistas, los cuales argumentaban una escasa participación de aquellos en organizaciones y/o movimientos sociales (*ibid.*). Es importante destacar el análisis que Petras realiza sobre la “incorporación subterránea” de los inmigrantes a la sociedad estadounidense:

La primera oleada de inmigrantes, en los años ochenta, como epílogo del choque neoliberal y del terror militar, buscaba trabajo de cualquier tipo, en el anonimato e incluso en las peores condiciones; muchos de sus componentes disimularon su pasado militante pero no lo olvidaron. A medida que la afluencia de trabajadores inmigrantes aumentaba, en las principales ciudades de California, Texas, Arizona y Nuevo México se concentraban grandes cantidades de trabajadores latinoamericanos. Ello condujo a la creación de una densa red de clubes sociales, culturales y deportivos, y de organizaciones informales basadas en anteriores vínculos familiares, de barrio o regionales. Florecieron muchos pequeños negocios, aumentó el poder adquisitivo, aumentó también la asistencia de niños a escuelas en que los latinoamericanos ya eran mayoritarios, y numerosas estaciones de radio se dirigían a los trabajadores inmigrantes en su propia lengua. Pronto, el sentimiento de solidaridad creció por la simple fuerza del número, la facilidad de comunicación, la proximidad de otros trabajadores compatriotas, y por encima de todo de la experiencia común de una explotación no sujeta a regulación ni a

¹ La revuelta que tuvo lugar en el área del Sur-Centro de Los Ángeles en 1991, fue protagonizada principalmente por la población afroamericana en respuesta a décadas de opresión y racismo de parte de las instituciones estatales dominadas por las elites blancas estadounidenses. De acuerdo a Santamaría (2007), el acontecimiento que detonó el estallido social fue el fallo de los Tribunales contra Rodney King, hombre negro que fue brutalmente golpeado por la policía de Los Ángeles, acusado de resistirse a la autoridad.

moderación, en los peores y peor pagados empleos, todo lo cual iba acompañado de actitudes racistas por parte de empresarios, trabajadores blancos, policías y otras autoridades (...). La anterior militancia proveniente de la resistencia popular masiva a los escuadrones de la muerte en El Salvador, el gusto por la libertad y la dignidad adquirido durante el periodo sandinista en Nicaragua, los múltiples movimientos campesinos de México “salieron del armario” y hallaron nueva expresión social en el movimiento de masas de los trabajadores inmigrantes (Petras, 2006, citado en Santamaría, 2007:103).

Así, el movimiento de 2006 estuvo cimentado en décadas de trabajo organizativo de parte de los trabajadores indocumentados mediante su involucramiento en sindicatos, clubes de migrantes, organizaciones religiosas, estudiantiles, de barrio, deportivas, artísticas, empresariales, entre otras (*ibid.*).

En cuanto a las organizaciones pioneras y líderes que apoyaron la lucha por los derechos de los inmigrantes indocumentados, Santamaría (*ibid.*), Gonzales (2014) y Shaw (2011) destacan a: el sindicato de los Trabajadores Agrícolas Unidos (*United Farm Workers*, UFW) fundado por César Chávez y Dolores Huerta; el Centro de Acción Social Autónoma (CASA), organización fundada por Bert Corona en 1969 y que junto con el UFW sirvió de escuela política para posteriores líderes pro-inmigrantes; las Boinas Cafés (*Brown Berets*); los partidos de izquierda estadounidense; los sindicatos de trabajadores agrícolas de Texas, Arizona y Ohio dirigidos por Antonio Orendáin, Guadalupe Sánchez y Valdemar Velázquez; el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Costura en el que destacaron Cristina Vázquez, Miguel Machuca y Tony Orea.

Los líderes centroamericanos formados durante la década de 1980 también jugaron un papel fundamental en la organización de las manifestaciones de 2006. Gonzales (2014) señala que activistas centroamericanos originarios principalmente de El Salvador y Guatemala, revitalizaron a una generación del movimiento chicano que iba en declive. La experiencia organizacional adquirida en sus países de origen fue crítica en la lucha para obtener el derecho de asilo en Estados Unidos. Estos liderazgos influyeron significativamente en la formación de activistas mexicanoestadounidenses.

Otro segmento de liderazgos surgió a raíz de la lucha contra la Propuesta 187, iniciativa de Ley surgida en California que intentaba negar servicios públicos fundamentales a los inmigrantes indocumentados. Como respuesta, activistas y estudiantes chicanas y chicanos e inmigrantes mexicanos y centroamericanos, realizaron una serie de protestas y huelgas masivas que eventualmente llevaron a la derogación de la Propuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia. Entre las y los líderes que surgieron a raíz de dicho

movimiento y que posteriormente participaron de manera activa en las mega marchas de 2006 se encuentra: Esther Portillo, activista salvadoreña que surge de una organización salvadoreña creada en la década de 1980 y que trabajó con la alianza *March 25* para organizar las protestas de 2006; Arturo Carmona, miembro del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM); y Mario Martínez de la Hermandad Mexicana Latinoamericana (Santamaría, 2007; Gonzales, 2014).

Estos liderazgos comprenden la legacia del movimiento de 2006 y fueron parte fundamental para que las manifestaciones se concretaran en tan poco tiempo y de manera masiva. A su vez, Santamaría (2007) encuentra aspectos fundamentales que nos permiten entender de mejor manera el desarrollo del movimiento de 2006.

CAPACIDAD DE CONVOCATORIA

Diversos autores concuerdan en que las marchas de 2006 convocaron entre 3.3 a 5.1 millones de personas, en más de 160 ciudades estadounidenses, alcanzando casi 400 demostraciones de poder colectivo en Estados Unidos (Wang y Winn, 2006; Bada *et al.*, 2006, citados en Barreto *et al.*, 2009; Santamaría, 2007; Wallace *et al.*, 2013, citado en Zepeda-Millán, 2016). A su vez, los inmigrantes mexicanos fueron mayoría dado su peso proporcional en cuanto a la cantidad de inmigrantes. Sin embargo, de acuerdo a Barreto *et al.* (2009), la participación no se limitó únicamente a los inmigrantes mexicanos, como algunos medios sostenían, sino que fue un movimiento que generó solidaridad entre la comunidad de latinos en Estados Unidos, independientemente de su estatus legal. El proyecto de Ley H.R. 4437 funcionó como un catalizador, una *amenaza* que activó sentimientos de empatía y solidaridad entre las y los latinos en general, ciudadanos y no ciudadanos (*ibid.*; Zepeda-Millán, 2016). Barreto y compañía (2009) encontraron que los mexicanos participaron en proporciones muy similares en comparación con los puertorriqueños, dominicanos, cubanos, centroamericanos y sudamericanos.

En cuanto a las ciudades que tuvieron mayor capacidad de convocatoria, iniciativa y creatividad se encuentran: Chicago, con estimaciones de 400 mil a 750 mil manifestantes y Los Ángeles, donde se estima que entre 400 mil y un millón de personas se manifestaron en sus calles (Santamaría, 2007; Watanabe y Becerra, 2006a, citados en Wang y Winn, 2011). Uno de los factores que explica dicha capacidad de convocatoria, tiene que ver con la presencia mayoritaria de los inmigrantes indocumentados en ambas ciudades, quie-

nes juntas concentraban a por lo menos el 80% del total² (Santamaría, 2007). En sí, las ciudades que aglomeraron a la mayor cantidad de personas durante las marchas de 2006 fueron aquellas que contaban con un mayor número de inmigrantes indocumentados, aunado esto a la sinergia generada entre los viejos y los nuevos liderazgos de estas ciudades.

LA HORIZONTALIDAD DE LOS NUEVOS LIDERAZGOS

Ya mencionábamos la importancia de los líderes surgidos hace ya más de cuatro décadas, entre los que sobresalen los chicanos,³ mexicanos y centroamericanos. Estos líderes, con toda su experiencia, contribuyeron a que el movimiento llegara a las magnitudes ya descritas.⁴ Sin embargo, otro tipo de líderes también contribuyeron de manera significativa en la difusión de las protestas, magnificando su alcance. Surgieron entonces personajes como: Eddie Sotelo, “El Piolín”; Renán Almendárez, “El Cucuy”; Humberto Luna y Ricardo Sánchez, “El Mandril”, locutores que decidieron utilizar su impacto y presencia pública para animar a la comunidad latina a protestar por sus derechos.

Algunos dejaron de transmitir sus programas de entretenimiento habituales transformándolos en campañas propagandísticas pro-inmigrantes. Un ejemplo que muestra la importancia de estos personajes para el buen desarrollo de las marchas, lo recogen Flores-González *et al.* (2006, citados en Bloemraad, Vozz y Lee, 2011) mediante datos recabados por medio de una encuesta en Chicago. Los investigadores encontraron que más de la mitad de las personas que se manifestaron de forma masiva el primero de mayo de 2006, se enteraron de la marcha por medio de la radio y la televisión. Esto se reprodujo en ciudades como Miami, Chicago, Los Ángeles,

² Actualmente la tendencia ha cambiado, pues ha habido una mayor dispersión de los inmigrantes en general. De acuerdo a datos del PEW (2017), las ciudades que concentraban a la mayor cantidad de inmigrantes no autorizados en 2014 fueron las zonas metropolitanas de: Nueva York-Newark-Jersey con 1 millón 150 mil; Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, en California con 1 millón y Houston-Woodlands-Sugar Land, en Texas con 575 mil inmigrantes no autorizados.

³ En su acepción más simple y reconociendo lo limitado de la definición, empleamos aquí el término chicana/o para referirnos a los ciudadanos de Estados Unidos descendientes de mexicanos.

⁴ Santamaría (2007:106) señala que fue de la década de 1970 donde se germinan los y las líderes más experimentados, destacando: Angelina Corona, Armando Navarro, Nativo López, Juan José Gutiérrez, Javier Rodríguez, María Elena Durazo, Felipe Aguirre, etc. (zona metropolitana de Los Ángeles); Emma Lozano, Omar López, José Artemio Arreola, Jorge Mújica, Luis Pelayo (zona metropolitana de Chicago).

Nueva York o Dallas. Algunos, inclusive, aunque tenían presencia nacional, movilizando a comunidades enteras (Santamaría, 2007; Bloemraad, Vozz y Lee, 2011; Wang y Winn, 2011). Cadenas televisivas como Univisión, Telemundo y Azteca América, jugaron un papel crítico en la difusión de la información sobre los lugares, hora y forma en la que se llevarían a cabo numerosas protestas, principalmente la llevada a cabo el 25 de marzo de 2006 (Gonzales, 2014).

La poderosa influencia que ejercieron los Disc Jockeys (DJs) y diversos medios de comunicación de habla hispana, llevó a algunos analistas e investigadores a pensar que las manifestaciones de 2006 surgieron de forma espontánea, más que de forma organizada. Algo similar sucedió respecto a las interpretaciones que los académicos sostuvieron durante el movimiento por los derechos civiles en la década de 1960 (Bloemraad, Voss y Lee, 2011). Sin embargo, esto oscurece el hecho de que sí existió organización entre los mismos locutores, si bien no de forma vertical como sucede con buena parte de las organizaciones pro-inmigrantes tradicionales. Por ejemplo, “El Mandril” Sánchez emitió el siguiente mensaje durante una de sus transmisiones por *La Que Buena* 105.5 FM: “Si estamos pidiendo que la gente se una a una marcha, ¿por qué los locutores no ponemos el ejemplo y nos unimos a esta causa?” (González, 2013:58). Santamaría (2007) también relata cómo en Los Ángeles, Eddie “El Piolín” Sotelo se organizó previamente con diez locutores de radio para difundir mensajes sobre las marchas, la misma estrategia la siguió “El Cucuy”.

Evidentemente los medios de comunicación en español jugaron un papel de trascendencia durante las protestas de 2006; sin embargo, estas manifestaciones de solidaridad obedecen a una lógica de mercado más que a expresiones genuinas de involucramiento cívico. Sus audiencias están compuestas casi en su totalidad por latinos, principalmente inmigrantes, ya que los latinos de segunda o tercera generación generalmente no escuchan medios en español. De tal forma que las empresas de comunicación masiva protegieron sus intereses capitalistas al transmitir mensajes pro-inmigrantes. En palabras de Santamaría:

La defensa de los inmigrantes es la defensa de sus negocios. De cualquier manera, la televisión y radio en español, como transmisores por excelencia de la cultura de masas, fueron los principales vehículos organizativos y propagandísticos de las movilizaciones de inmigrantes hispanos. En este caso, la cultura popular de los medios electrónicos, personificada por los conductores más conocidos de la radio en español, fue el vehículo más versátil y eficaz en la organización y propaganda de las movilizaciones más numerosas, sostenidas en la historia contemporánea de Estados Unidos, complementando,

reproduciendo y consolidando la labor que a lo largo de muchos años habían realizado las organizaciones defensoras de los inmigrantes (Santamaría, 2007:108).

Así, el liderazgo de los DJ's no formaba parte de ninguna estructura social o política. En efecto, posteriormente se alejaron del movimiento a tal grado que no participaron en el boicot del primero de mayo, atendiendo instrucciones de los dueños de las estaciones de radio. En suma, se observó que las organizaciones que surgieron de las comunidades de inmigrantes durante las tres décadas anteriores al movimiento, tuvieron un liderazgo confederado y descentralizado, complementado éste con la capacidad de convocatoria de los medios de comunicación de masas, terminó rebasando las expectativas tanto de organizadores como de académicos y periodistas (Santamaría, 2007). No obstante, teóricos como Gonzales (2014) argumentan que dentro del movimiento había dos facciones o bloques que obedecían a distintos intereses y, por tanto, implementaron estrategias diferenciadas. Precisamente, el hecho de que uno de estos bloques fuera centralizado y vertical, al que él denomina “los reformadores”, llevó al rompimiento con el bloque al que Gonzales llama “oposicional”, el cual tiene las características que Santamaría describe (confederado y descentralizado). Esta ruptura se analizará en un apartado posterior.

PLURALIDAD NACIONAL Y SOCIAL

Otra de las características particulares del movimiento fue su carácter transnacional, pues se buscó el apoyo de actores políticos en México, Centro y Sudamérica. Veintiséis dirigentes que participaron en la cumbre que se llevó a cabo en el centro de convenciones de Riverside, California (en febrero de 2006), se dirigieron a México y otros países al sur de Estados Unidos para reunirse con líderes políticos, sindicales, religiosos y de derechos humanos con el objetivo de encontrar aliados que a su vez pudieran presionar a la administración del entonces presidente George Bush. Por ejemplo, una de las delegaciones se reunió en la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador y con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Sin embargo, aunque por primera vez se obtuvo la simpatía de los ciudadanos mexicanos, centro y sudamericanos para con sus comunidades de migrantes, no se llevaron a cabo manifestaciones masivas; salvo las protestas que surgieron en los estados fronterizos mexicanos.

Por otro lado, las comunidades latinas no fueron las únicas que participaron activamente en las protestas de 2006. Hubo también inmigrantes africanos, europeos, asiáticos y canadienses que se unieron a las manifestaciones en las ciudades principales, dándole al movimiento un carácter multinacional. Un clérigo musulmán de nombre Abdul Malik, con residencia en Chicago, describe de manera clara la significancia del movimiento para su propia comunidad:

Los organizadores latinos han hecho un gran favor no tan solo así mismos sino al conjunto de los inmigrantes, así como a los mismos Estados Unidos, al ponerse de pie y decir que el sistema de inmigración se ha caído y necesita ser reparado. Lo que procede es que el resto de nosotros debemos unirnos (Wood, 2006, citado en Santamaría, 2007:110).

En otra entrevista realizada a Chung-Wha Hong, líder de origen chino y miembro de la Coalición Inmigrante de Nueva York, menciona su postura respecto a la importancia del momento: “La pregunta es si Estados Unidos continuará siendo o no lo que siempre ha sido: una nación de inmigrantes” (*ibid.*).

LA TRANSGENERACIONALIDAD DEL MOVIMIENTO

En general, las y los estudiantes latinos en Estados Unidos enfrentan obstáculos estructurales que les impiden desarrollarse de manera óptima en el ámbito educativo. Los bajos ingresos de sus familias, la mala calidad de las escuelas públicas a las que asisten, la baja escolaridad promedio de sus padres que les impide contar con el capital cultural adecuado para navegar las dificultades que se pueden encontrar en las universidades y, principalmente, lo que restringe en mayor medida sus oportunidades: el estatus de ilegalidad. En 2006, las y los estudiantes latinos ostentaban los porcentajes más bajos de culminación de estudios a nivel bachillerato, pues tan solo el 56% logró recibirse. Además, de los que lograron graduarse, solo el 12% obtuvieron calificaciones positivas. Como ya señalamos, la principal barrera es el estatus migratorio de ilegalidad impuesto por el Estado (Abrego, 2016; Santamaría, 2007; Negrón-Gonzales, 2017).

De tal manera que las y los estudiantes latinos y latinas de nivel bachillerato fueron uno de los principales grupos que mostraron su descontento durante las movilizaciones de 2006. Santamaría (2007) señala que ellos formaron un movimiento dentro del movimiento más amplio, exigiendo la aprobación del Proyecto de Ley conocido como *DREAM Act* que, de

aprobarse, les abriría la posibilidad para realizar estudios superiores. De acuerdo a Nicholls (2013), este movimiento no existía antes del 2000, no había historias ni argumentos compartidos que pudieran expresar una sola voz, tampoco existía la infraestructura organizacional ni política adecuada para aglutinar a este grupo de jóvenes. Así es que a principios de los 2000, organizaciones como el National Immigration Law Center (NILC) y el Centro para el Cambio Comunitario (*Center for Community Change*) llevaron la batuta, desarrollando estrategias para lograr la aprobación del proyecto *Dream Act*. Este tipo de organizaciones sentaron las bases para lo que después sería conocido como el movimiento de los Dreamers.

La zona metropolitana de Los Ángeles se constituyó entonces como el epicentro de las movilizaciones que llevaron a cabo las y los estudiantes latinos, contagiando con su entusiasmo a estudiantes de otras regiones de Estados Unidos. Inclusive, contingentes de estudiantes afroamericanos se unieron a los latinos para manifestar sus inconformidades ante el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraygoza. Éste, aunque aparentemente les expresó su apoyo, posteriormente les requirió que no realizaran más paros (*walk outs*). Santamaría (2007) menciona que estas protestas tuvieron una continuidad nunca antes vista de parte de los estudiantes. Las marchas se cristalizaron en la creación de una organización a la que denominaron *Coalition to Defend Affirmative Action, Integration and Immigrant Rights*.

Entre las organizaciones estudiantiles y juveniles que tuvieron un papel importante en la organización y desarrollo de las mega marchas de 2006 está: el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MEChA); la Asociación de Estudiantes de Posgrado Raza (*Raza Graduate Student Association*) de la Universidad de California, Los Ángeles; la organización Actúa Ahora para Detener la Guerra (*Act Now to Stop War*); y la Organización Internacional Socialista (International Socialist Organization). Estas organizaciones del sur de California lograron arrastrar a unas 15 mil personas a las protestas del 15 de abril de 2006, y lo hicieron sin recursos de organizaciones de universidades o de fundaciones de gran envergadura (Gonzales, 2014), teniendo así un liderazgo más horizontal.

EL PAPEL DE LA IGLESIA

La Iglesia Católica jugó un papel de suma relevancia para el movimiento. Estudios muestran cómo la Iglesia Católica tiene un mayor involucramiento en la organización de marchas en comparación con otras denominaciones religiosas, así como una mayor tendencia a negociar con agentes gubernamentales.

mentales (Beyerlein y Chaves, 2003, citados en Heredia, 2011). Su infraestructura organizacional fue instrumental en la organización de algunas de las marchas, además, dotó de legitimidad simbólica al movimiento. Bloemraad, Voss y Lee (2011) muestran cómo el discurso religioso ha formado parte de diversos movimientos de protesta social en Estados Unidos. Sin embargo, Heredia (2011) señala que la participación de la iglesia católica en el movimiento de 2006 tuvo rasgos distintos, pues ésta tuvo una participación más local en comparación con su participación en anteriores movimientos sociales.

Para Santamaría (2007), los números son importantes, pues la inmigración de latinos a Estados Unidos, principalmente la de mexicanos —país mayoritariamente católico—, proveyó de fieles a la Iglesia Católica estadounidense como ningún otro grupo nacional lo había hecho anteriormente. John McCloskey, historiador de la Iglesia Católica estadounidense, va lejos y asevera que el futuro de ésta depende del servicio que se les ofrezca a los inmigrantes latinos.

En diferentes ciudades, la solidaridad de miembros preminentes de la iglesia queda en evidencia. Por ejemplo, el obispo de Brooklyn, en Nueva York, Nicholas Di Marzio, criticaba duramente al sistema migratorio del Estado y ensalzaba el “espíritu cultural y religioso” de los inmigrantes, el cual fortalecía a las comunidades locales (Santamaría, 2007:114). Por su parte, el cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, adoptó una postura firme y de confrontación ante el Estado, al declarar públicamente ante las medias sus desaprobaciones a la H.R. 4437, y llamar a la desobediencia civil si es que la propuesta se convertía en ley. Voces similares se escucharon en distintas ciudades en Estados Unidos. Así, para algunos activistas latinos, como Rosalío Muñoz o Víctor Narro, el apoyo de la iglesia fue vital, señalando que, sin el apoyo de ésta, los medios de comunicación no hubieran apoyado de la misma forma (González, 2013; Santamaría, 2007).

EL APOYO DE LOS SINDICATOS AL MOVIMIENTO

Los sindicatos fueron parte central en la organización de las movilizaciones en pro de los inmigrantes en 2006. Por ejemplo, Mújica (2006, citado en Santamaría, 2007) destaca que los sindicatos estadounidenses presionaron a los empresarios para que los inmigrantes pudieran asistir a las movilizaciones en Chicago. Sin embargo, James Petras tiene una percepción distinta del papel que los sindicatos fungieron durante el movimiento, para él, los trabajadores inmigrantes lograron una movilización sin precedentes, logro

que la confederación de sindicatos y sus afiliados no pueden atribuirse en lo absoluto (Santamaría, 2007).

Gonzales (2014) tiene un análisis más medurado respecto al rol que los sindicatos ejercieron durante el movimiento. Por ejemplo, aunque señala que algunas organizaciones sindicales fueron importantes, deja en claro que éstas no proporcionaron los liderazgos que llevaron a la materialización de las mega marchas. De hecho, algunos sindicatos se mostraron escépticos respecto a las estrategias adoptadas, prefiriendo enfocarse más en tácticas tradicionales como la negociación directa con los políticos. Una muestra de esto se observó en la participación del sindicato UNITE HERE Local 11, *Justice for Janitors* (Personal de Limpieza por la Justicia), donde sus miembros de base decidieron participar activamente en las marchas, pero la burocracia del sindicato nunca se comprometió por completo.

Santamaría (2007) concuerda con Gonzales respecto a que los liderazgos de los sindicatos no llevaron la vanguardia del movimiento. Sin embargo, sí cree que el apoyo financiero y logístico de éstos fue significativo y contribuyó, junto con otras instituciones como la iglesia o los medios de comunicación, para que las movilizaciones logran llevar a millones a las calles.

En un análisis sumario del movimiento, Santamaría señala lo siguiente:

Lo extraordinario y relevante de este movimiento es que los inmigrantes indocumentados, el sector más desprotegido y explotado de las clases trabajadoras de Estados Unidos, se haya convertido en el actor que dinamice el movimiento sindical y en el creador del movimiento social más importante de Estados Unidos desde la lucha por los derechos civiles, así como el único movimiento de las clases trabajadoras del mismo país en realizar un paro nacional en toda su historia. Pero este movimiento laboral no fue puro porque contó con el apoyo de importantes sectores empresariales, la Iglesia católica y organizaciones políticas cercanas al Partido Demócrata, así como un dinámico y espontáneo movimiento estudiantil (Santamaría, 2007:118).

¿QUÉ HA SUCEDIDO DESPUÉS DE LAS MEGA MARCHAS?

Fisuras en el movimiento: el movimiento logró su objetivo más directo, el Proyecto de Ley H.R. 4437 fue rechazado. Sin embargo, después de las protestas multitudinarias de 2006, el movimiento de la lucha por los derechos de los inmigrantes se había fisurado. El Congreso trajo de nuevo a la mesa el Proyecto de ley Kennedy-McCain (S 2611) que, aunque prometía un camino para legalizar a un grupo de inmigrantes indocumentados y eliminaba los aspectos más draconianos de la H.R. 4437, continuaba proponiendo mayor militarización fronteriza y control interno.

Instituciones que jugaron un papel de trascendencia para el desarrollo de las marchas, tomaron una postura de distanciamiento con los sectores más “radicales” u *oposicionales*, como los denomina Gonzales (2014), ya que estos últimos no aceptarían ninguna ley que aumentara la militarización fronteriza. Por ejemplo, la Iglesia Católica, los sindicatos laborales y otras organizaciones más moderadas decidieron no colaborar más con los grupos que se oponían firmemente a cualquier proyecto de ley que implicara mayor militarización. Y no es que todos los grupos más moderados aceptaran o creyeran que era necesario fortalecer las fronteras y ejercer mayor control interno, sino que veían prácticamente imposible que se lograra obtener concesiones de parte del Congreso sin ceder en otras áreas. Organizaciones como Somos América o el Centro para el Cambio Comunitario (*Center for Community Change*), creían que seguir un camino moderado les daría más oportunidades para lograr sus objetivos.

Así, el bloque moderado integrado por fundaciones con gran cantidad de recursos como Atlantic Philantropies o el Foro Nacional de Inmigración y políticos demócratas, adoptaron una estrategia que implicó centralizar la toma de decisiones, surgiendo así la alianza denominada Reforma de Inmigración para América (*Reform Immigration for America, RIFA*). También surgieron organizaciones como la llamada Alianza Unidos Soñamos (*United We Dream Coalition*),⁵ que se unieron al proyecto de RIFA y que pretendían reintroducir el proyecto de ley DREAM en las demandas al Congreso (Nicholls, 2013; Gonzales, 2014).

Por su parte, los sectores más radicales u opuestos a ceder ante cualquier propuesta que implicara militarizar (más) la frontera y la “seguridad” interna, exigían un camino para legalizar a *todos* los inmigrantes indocumentados sin condiciones, demandando también atacar las causas estructurales de la migración en América Latina. Ejemplos de organizaciones que sostenían esta postura son la Alianza Marzo 25 (*March 25 Coalition*), el Frente Continental, la Coordinadora Estudiantil de la Raza y la Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados (*National Network for Immigrant and Refugee Rights*). Sin embargo, estas facciones no tenían una estrategia clara y fueron relegados de la toma de decisiones, la cual se estaba llevando a cabo directamente con políticos demócratas y otras organizaciones moderadas (Gonzales, 2014).

Posteriormente, Estados Unidos vivió la elección del primer presidente afroamericano en su historia, Barack Obama. La victoria de Obama se dio

⁵ Aunque esta organización estaba integrada principalmente por jóvenes estudiantes indocumentados, otras organizaciones tomaban las decisiones más importantes respecto al rumbo que tomaría dicha asociación.

durante un momento coyuntural particularmente difícil para el ala conservadora estadounidense, donde el apoyo a la administración de George Bush decrecía debido a su incursión en el conflicto armado de Iraq y Afganistán, aunado a la angustia que generó la crisis económica mundial. Después de las manifestaciones masivas, la energía se canalizó a la arena electoral y de la negociación con actores políticos. En efecto, la comunidad latina otorgó un apoyo electoral inédito hacia Barack Obama,⁶ quien se mostró solidario con los inmigrantes en el discurso, prometiendo un sistema migratorio más justo y humano.

Sin duda, el momento generaba expectativas sumamente alentadoras para las y los inmigrantes indocumentados, pues se había logrado obtener mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso, y con un presidente también demócrata que se promulgaba en favor del cambio pro-inmigrante, las esperanzas para lograr la concreción de una reforma migratoria integral se veían menos sombrías (Gonzales, 2014; Nicholls, 2013).

Sin embargo, no se logró avanzar en el ámbito legislativo y las acciones de reforzamiento fronterizo y de control interno aumentaron, con un tope histórico de deportaciones como corolario. Ante este panorama, en 2010 los dreamers encabezaron un movimiento que llevaría por lema “Indocumentados y Sin Miedo” (*Undocumented and Unafraid*), con el objetivo de presionar a la administración de Obama, quien se veía en la necesidad de firmar una orden ejecutiva para liberar dicha presión. Así, se obtuvo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), que otorgó alivio temporal para un grupo *selecto* de jóvenes indocumentados.

DACA está dirigido a aquellos jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad y que al momento de su aplicación no tengan más de 31 años de edad (entre otros requisitos casi imposibles de cubrir para la mayoría de los inmigrantes indocumentados), protegiéndolos de la deportación y permitiéndoles trabajar temporalmente (tan solo dos años con opción para renovar). Aun así, les niega diferentes servicios otorgados por el Estado y no les provee un camino para obtener la ciudadanía⁷ (Nicholls, 2013; Gonzales, 2014). Además, el hecho de solicitar acceso a los beneficios de DACA implica el registro en la base de datos gubernamental, lo que los deja vulnerables ante la revocación del programa producto

⁶ De los 10 millones de latinos aptos para votar en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008, 67% emitieron su voto por el candidato demócrata Barack Obama (Preston, 2008, citada en Gonzales, 2014).

⁷ A la fecha, son aproximadamente 800 mil jóvenes (78% mexicanos) los que se han beneficiado de alguna forma con este programa (Comunicado de Prensa de la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes, 2017).

de un nuevo mandato presidencial. Este escenario se muestra cada vez más probable durante la actual administración de Trump.

Aunque este programa ha beneficiado sustancialmente a un grupo minoritario de inmigrantes indocumentados y para algunos ha significado un avance, la realidad es que el panorama para la gran mayoría de los inmigrantes sin documentos es sombrío, incluyendo a los actuales “DACAmantados” (*DACAmented*), como se les ha llamado recientemente. Este tipo de medidas solo refuerzan el binario del “inmigrante bueno” *versus* el “inmigrante malo”, que perpetúa un discurso esencialista, donde sólo los inmigrantes que demuestren atributos extraordinarios son merecedores de alcanzar algunos beneficios. En cambio, aquellos que no encajen en el modelo construido por el Estado, son entes carentes de derechos de ningún tipo y, por tanto, deportables (Nicholls, 2013; Gonzales, 2014; Lauby, 2016).

Conscientes de esto, los dreamers han ido modificando su discurso, razón por la cual adoptaron el lema *Undocumented and Unafraid* (Lauby, 2016). A este respecto, Nicholls (2013) realiza un análisis teórico que nos ayuda a entender de mejor manera el cambio en la estrategia. Con base en entrevistas con integrantes del movimiento, encuentra que este nuevo discurso enfatiza el estado ambivalente en el que viven estos jóvenes, es decir, ellos son indocumentados, pero también son “americanos”. La relevancia de este argumento radica en que ahora se confronta la idea tradicional de lo que es ser “americano”, haciendo alusión a su estado intermedio (*in-between*) y rompiendo con el modelo tradicional del “buen inmigrante”. A su vez, los jóvenes indocumentados incorporan un elemento *interseccional* en su lucha, es decir, su identidad no es exclusivamente la de un inmigrante indocumentado estadounidense, también son parte de la comunidad lésbica, gay, *queer*, transexual, son mujeres, personas de color y demás identidades. Cada una de estas identidades implica vivencias distintas, que a su vez pueden generar mayor opresión sistémica. La lucha *interseccional* es entonces, una lucha más amplia (*ibid.*).

Mayor seguridad = mayor criminalización hacia los inmigrantes: después de 2006, las redadas efectuadas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (*Immigration and Customs Enforcement*, ICE) se han incrementado significativamente en los lugares de trabajo de los inmigrantes, casas, escuelas e incluso iglesias. El número de deportaciones ha mostrado incrementos constantes desde la administración de George Bush, llegando a su máximo con el presidente demócrata Barack Obama (Bloemraad, Voss y Lee, 2011) y manteniéndose estable, aparentemente, con Donald Trump. No obstante, bajo la actual administración, el número de arrestos a inmigrantes indocumentados ha aumentado en un 38% en comparación con el

mismo periodo en 2016 (*Department of Homeland Security*, 2017). Nuevas técnicas de detención y programas federales se han implementado no solamente para dificultar la entrada fronteriza, sino para incrementar el control interno mediante programas como *E-verify* o Comunidades Seguras. Queda claro entonces que la aprobación de políticas que criminalizan a los inmigrantes es cada vez más común, aun cuando se tenga mayoría demócrata en el gobierno.

LA ERA DE TRUMP

El regreso del Partido Republicano a la Casa Blanca, con Donald Trump como presidente, y al dominio de este partido en el Congreso, ha polarizado a la opinión pública en Estados Unidos. La campaña política de Trump utilizó un lenguaje claramente xenofóbico, discriminatorio y de confrontación, dirigido hacia los inmigrantes “ilegales” latinos principalmente, en especial hacia los inmigrantes mexicanos y a inmigrantes provenientes de algunos países de mayoría musulmana.

La sorpresiva victoria tenía perplejos a demócratas y republicanos, pues las encuestas daban mayoría a la candidata demócrata Hillary Clinton. Académicos de reconocimiento y trayectoria veían clara la victoria de Clinton. Sin embargo, el resultado fue distinto, inclusive con el apoyo sin precedentes de la comunidad latina hacia la candidata demócrata, con un margen de 79-18% de acuerdo a la encuestadora *Latino Decisions* (2017), rebasando el apoyo otorgado a Obama en 2012.

Con gritos como “No es mi Presidente” (*Not my President*) o “No al Fascismo”, miles de personas salieron a manifestarse pocos días después de conocer los resultados de la elección. Las protestas se dejaron sentir en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Austin, Boston, Chicago, Denver, Philadelphia, Portland, Washington, San Francisco, Seattle, entre otras. Por ejemplo, en Nueva York, cuando menos 10 000 personas salieron a las calles de acuerdo a la agencia de noticias WABC, en Oakland se presentaron aproximadamente unas 7 000 personas, en Boston la estimación es de diez mil manifestantes. En diversos casos hubo confrontaciones y actos de violencia.

La hostilidad hacia los inmigrantes latinos de parte de los sectores conservadores estadounidenses ha ido en aumento. De acuerdo a la encuestadora *Latino Decisions* (2017), por primera vez las y los latinos creen que el racismo es uno de los temas que deben de ser enfrentados por el Congreso y el presidente. La percepción creciente de hostilidad y las confrontacio-

nes hacia la comunidad latina son mero producto del discurso enarbolado por el presidente.

En su libro *Great Again*, Trump (2015) dedica un capítulo al tema de la inmigración y delinea su postura al respecto. Congruente con el discurso que llevó durante su campaña, el actual ocupante de la Casa Blanca toca los siguientes temas: la importancia que conlleva detener por completo la inmigración “ilegal”, principalmente la que proviene de México y Centroamérica —inmigrantes que son “violadores y asesinos”—, mediante la construcción de un muro que “México pagará” (Muro que, como sabemos ya existe y que se ha venido extendiendo), fortalecimiento de sus fronteras (que también se han venido militarizando cada vez más desde hace dos décadas); la creación de un programa como el “Operation Wetback” (Operación Espalda Mojada), el cual se implementó durante el mandato del presidente Eisenhower en 1954 y que de acuerdo a Lytle Hernández (2006) resultó en la deportación de al menos un millón de inmigrantes “ilegales”, principalmente mexicanos; aumentar la cantidad de agentes de inmigración para deportar a los inmigrantes “ilegales” y a aquellos que han cometido delitos; recortar el presupuesto federal a las ciudades “santuario”, es decir, aquellas que no cooperen con los agentes federales de inmigración; crear penalizaciones serias para los inmigrantes que se queden en Estados Unidos cuando sus visas hayan vencido; terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento para aquellos infantes que no estén de forma “legal” en Estados Unidos, despectivamente conocidos como “bebés ancla”, y/o con el otorgamiento de permisos de residencia para sus familiares; cerrando finalmente con un rechazo rotundo a la idea de crear un camino para obtener la ciudadanía a aquellos inmigrantes “ilegales”.

A un año de su administración, Trump no ha concretado ninguna de sus propuestas, aun con una mayoría republicana en el Congreso. Sin embargo, se espera que termine el programa DACA. De ser así, aún no se conoce qué pasará con los casi 800 mil actuales beneficiarios del programa. Por otro lado, Trump terminó con el Programa de Protección Temporal (*Temporary Protected Status*, TPS) para los nacionales de algunos países beneficiarios. El TPS es una categoría legal creada por el gobierno estadounidense con el objetivo de otorgar asilo a personas provenientes de países que se han visto afectados por desastres naturales o por guerras. Actualmente, el TPS otorga asilo a aproximadamente 300 mil inmigrantes, la mayoría salvadoreños y hondureños (Cady y Abrego, 2017).

Estas acciones dejan ver que no son sólo los inmigrantes indocumentados los que están en la mira, sino también aquellas personas que tienen un estatus legal precario, como el TPS. Así, el panorama para los próximos años no es nada alentador.

REFLEXIONES FINALES

Actualmente, existe una división y heterogeneidad tal entre los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, que ha sido muy difícil contrarrestar las estrategias delineadas por los grupos conservadores y/o anti-inmigrantes, las cuales son ejecutadas por el Estado, independientemente de que éste sea dirigido por republicanos o demócratas.

El discurso de la *amenaza latina* construido por políticos conservadores, ciertos medios de comunicación tradicionales estadounidenses, algunos académicos, *think tanks* conservadores, entre otros grupos de interés, ha logrado generar una representación negativa de la comunidad latina en buena parte del imaginario popular estadounidense. Dichas representaciones discursivas equiparan a las latinas y los latinos con “criminales”, foráneos en su propia tierra, no asimilables, “ilegales” y, por ende, deportables (Chavez, 2013). Aunque el peso de dicha narrativa recae sobre la comunidad latina en general, este discurso impacta con mayor firmeza en las espaldas de las y los inmigrantes indocumentados, dada su condición de “ilegalidad” impuesta por el Estado.

Para Gonzales (2014), precisamente la construcción de dichas representaciones discursivas de parte de lo que él llama “el bloque anti-inmigrante”, ha llevado a la criminalización de la comunidad latina en Estados Unidos (“legales”, “ilegales” y ciudadanos), principalmente desde la década de los años ochenta, cristalizándose en el reforzamiento de la frontera México-Estados Unidos, de la política de seguridad interna estadounidense e, inclusive, en la militarización de la frontera sur de México.

Las y los latinos tendrán que hacer uso de la protesta, la manifestación masiva, la organización con las bases societarias, de su experiencia de más de cuatro décadas, de los nuevos liderazgos, la construcción de alianzas locales, regionales, nacionales y transnacionales. El músculo está y será utilizado.

BIBLIOGRAFÍA

- Abrego, L.J. (2016), “Illegality as a Source of Solidarity and Tension in Latino Families”, en *Journal of Latino/Latin American Studies*, vol. 8, núm. 1, pp. 5-21.
- American Immigration Council (2017), *Immigrants in the United States*, disponible en <<https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigrants-in-the-united-states>>, consultado en noviembre de 2017.

- Barreto, M.; Manzano, S., Ramírez, R. y Rin, K. (2009), "Mobilization, Participation, and *Solidaridad*, Latino Participation in the 2006 Immigration Protest Rallies", en *Urban Affairs Review*, vol. 44, núm. 5, pp. 736-764.
- Bloemraad, I., Voss, K. y Lee, T. (2011), "The Protest of 2006, What Were They, How Do We Understand Them, Where Do We Go?", en K. Voss e I. Bloemraad (coords.), *Rallying for Immigrant Rights, The Fight for Inclusion in 21st Century America*, Los Ángeles, University of California Press, pp. 14-47.
- Cady, M. y Abrego, L. (2017), *Seeking a Permanent Protected Status*, disponible en <<https://nacla.org/news/2017/11/16/seeking-permanent-protected-status>>, consultado en noviembre de 2017.
- Chavez, L.R. (2013), *The Latino Threat, Constructing immigrants, Citizens, and the Nation* [versión electrónica], Stanford, Stanford University Press.
- Department of Homeland Security (2017), *ICE ERO immigration arrests climb nearly 40%*, disponible en <<https://www.ice.gov/features/100-days>>, consultado en noviembre de 2017.
- Gallagher, J.J. y Caplan, D. (2017), *Tens of Thousands Protest Trump Election Victory, 124 Arrested*, disponible en <<http://abcnews.go.com/Politics/thousands-us-protest-president-elect-donald-trump/story?id=43427653>>, consultado en noviembre de 2017.
- Gonzales, A. (2014), *Reform Without Justice, Latino Migrant Politics and the Homeland Security State*, Nueva York, Oxford University Press.
- Heredia, L. (2011), "From Prayer to Protest, The immigrant Rights Movement and the Catholic Church", en K. Voss e I. Bloemraad (coords.), *Rallying for Immigrant Rights, The Fight for Inclusion in 21st Century America*, Los Angeles, University of California Press, pp. 94-111.
- Latino Decisions (2017), *New poll, overwhelming majority of Latinos frustrated with Trump*, disponible en <<http://www.latinodecisions.com/blog/2017/09/25/new-poll-overwhelming-majority-of-latinos-frustrated-with-trump/>>, consultado en octubre de 2017.
- Lytle Hernández, K. (2006), "The Crimes and Consequences of Illegal Immigration, A Cross-Border Examination of Operation Wetback, 1943 to 1954", en *The Western Historical Quarterly*, vol. 37, núm. 4, pp. 421-444.
- Negrón-Gonzales, G. (2017), "Constrained Inclusion, Access and Persistence Among Undocumented Community College Students in California's Central Valley", en *Journal of Hispanic Higher Education*, vol. 16, núm. 2, pp. 105-122.
- Nicholls, W. J. (2013), *The DREAMers, How the Undocumented Youth Movement Transformed the Immigrant Rights Debate* [versión electrónica], Stanford, Stanford University Press.

- UN-Naciones Unidas (2016), “International Migration Report 2015”, en *Department of Economic and Social Affairs, Population Division*, disponible en <<http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/index.shtml>>, consultado en noviembre de 2017.
- Pew Research Center (2017), *unauthorized immigrant population trends for states, birth countries and regions*, disponible en <<http://www.pewhispanic.org/interactives/unauthorized-trends/>>, consultado en noviembre de 2017.
- Santamaría, A. (2007), “El movimiento de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos”, en *Política y Cultura*, núm. 27, pp. 99-120.
- Trump, D. (2015), *Great Again, How to Fix Our Crippled America*, Nueva York, Threshold Editions.
- Shaw, R. (2011). Building the Labor-Clergy-Immigrant Alliance, En K.Voss e I. Bloemraad (coords.), *Rallying for Immigrant Rights. The Fight for Inclusion in 21st Century America*, Los Ángeles, University of California Press, pp. 78-93.
- Wang, T y Winn, R. (2011), “Groundswell Meets Groundwork Building on the Mobilizations to Empower Immigrant”, en K.Voss e I. Bloemraad (coords.), *Rallying for Immigrant Rights. The Fight for Inclusion in 21st Century America*, Los Ángeles, University of California Press, pp. 48-60.
- Zepeda-Millán, C. (2016), “Weapons of the (Not So) Weak: Immigrant Mass Mobilization in the US South”, en *Critical Sociology*, vol. 42, núm. 2, pp. 269-287.

